

LA CONEXIÓN TERRORISMO-DROGAS EN LA REGIÓN ANDINA DE AMÉRICA LATINA*

Mark S. Steinitz**

El dinero del tráfico ilícito de drogas ayuda cada vez más a financiar grupos terroristas en todo el mundo, pero es posible que en ninguna parte esta evolución haya sido más significativa que en los Andes de América Latina¹. En los últimos años, el financiamiento derivado de la industria de la cocaína y la heroína se ha adscrito en gran medida al terrorismo en esa conflictiva región.

Los principales grupos andinos de izquierda con conexiones de drogas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el peruano Sendero Luminoso (SL). Los terroristas colombianos de derecha, llamados colectivamente “paramilitares”, también tienen vínculos de larga data con los traficantes. Desde 1997, los paramilitares han sido a menudo conocidos por el nombre de su principal organización central, la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

* *Policy Papers on the Americas*, Volumen XIII, Estudio 5, Julio 2002, Center for Strategic and International Studies (CSIS). Traducción de Ricardo Alvarado Portalino. Una versión anterior de este trabajo fue presentado en el Centro Nacional de Formación en Asuntos Exteriores del Departamento de Estado U.S., para el seminario “*Anti-Narcotic Efforts in the Western Hemisphere*”, en diciembre del 2001. Las opiniones aquí expresadas son del autor y no representan la opinión del Departamento de Estado U.S. o del gobierno de los EE.UU.

** Mark S. Steinitz es director de la Oficina de Análisis para Terrorismo, Narcóticos y Delitos en la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR) del Departamento de Estado U.S., posición que ha ocupado desde 1989. Se unió a la INR en 1983, después de cinco años como analista de inteligencia de la DEA. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown. Puede ser contactado en ACmstein@us-state.osis.gov

¹ Para un tratamiento más temprano de este problema en todo el mundo, ver Mark S. Steinitz, “*Insurgents, Terrorists, and the Drug Trade*”, *The Washington Quarterly* 8 (otoño 1985): 141-153. Para debates más recientes y amplios, ver Stefan Líder y Wiencek David, “*Drug Money: The Fuel for Global Terrorism*”, *Jane’s Intelligence Review* (febrero 2000), pp. 49-54, y Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction* (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 210-225.

El dinero vinculado a la droga de estos terroristas de base rural proviene principalmente de “impuestos” y derechos exigidos a los traficantes a cambio de protección a los cultivos ilícitos, laboratorios y envíos. Sin embargo, durante los últimos años, las FARC y las AUC se han involucrado directamente en el tráfico de drogas. Por ejemplo, los terroristas han producido y transportado drogas – generalmente cocaína, en sus diversas etapas de refinamiento- y entonces proporcionan droga a los traficantes, a cambio de dinero y armas. Al menos por ahora, la mayoría de la actividad de tráfico por parte de las FARC y las AUC se ha producido en Colombia o en países vecinos, en la etapa temprana y media de la cadena de fármacos, mientras que las bandas criminales tradicionales continúan manejando la distribución y ventas en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, al ir más allá de la recaudación de impuestos, las dos organizaciones terroristas están en condiciones de obtener mayores ganancias.

Los terroristas de derecha, como las AUC, han sido tradicionalmente más propensos que sus homólogos de izquierda a participar en actividades económicas delictivas y establecer relaciones con el bajo mundo. Con la guerra fría terminada y el comunismo ampliamente percibido como un fracaso, los grupos de izquierda de los Andes también han devenido cada vez más en híbridos de política y empresas ilícitas.

Esto no quiere decir que las FARC y SL siempre cooperen con los traficantes de drogas. Su relación con los “narcos” ha sido mezclada y fluida, con elementos de conflicto y competencia, así como de cooperación y coordinación. La popular idea de una “alianza narco-terrorista” puede ser engañosa. Sin embargo, lo preocupante es que estos terroristas de izquierda y los traficantes de drogas, a pesar de sus diferencias, han logrado colaborar lo más posible. Para Colombia y Perú, las consecuencias han sido devastadoras.

Orígenes colombianos del vínculo terrorismo-drogas: El caso M-19

En gran medida, la relación entre terrorismo y drogas en los Andes gira en torno a Colombia. Aunque Colombia se convirtió en una importante fuente de

marihuana en la década de 1970, el avance durante la década de la más lucrativa industria de la cocaína impulsó a los grupos terroristas de izquierda a tomar en cuenta el surgimiento de una clase de ricos traficantes. El primer grupo en hacerlo fue el Movimiento 19 de Abril (M-19). Vio a los traficantes como “nuevos ricos” y blancos para el secuestro y la extorsión –fuentes principales de los ingresos del grupo, complementadas por dinero de países como Cuba y Libia-. A fines de 1981, el M-19 secuestró a la hermana de Jorge Ochoa, miembro del cártel de Medellín, la red que dominaba el contrabando de cocaína en Colombia. En respuesta, el escuadrón de la muerte “Muerte a Secuestradores”, patrocinado por los traficantes, asesinó a miembros y simpatizantes del M-19 hasta que la hermana de Ochoa fue liberada a principios de 1982².

Sin embargo, al mismo tiempo que el M-19 se aprovechaba de los capos de Medellín, cooperaba con el principal traficante colombiano, Jaime Guillot-Lara, en un nexo drogas-armas, con participación de altos funcionarios cubanos. A cambio de la protección cubana a sus cargamentos de droga, Guillot-Lara entregó armas al M-19, cliente de los cubanos. En un intercambio de este tipo en octubre de 1981, el navío de Guillot-Lara *Zar de Honduras* entregó 7 toneladas de armas al M-19. Por su parte, el M-19 cargó 8.000 libras de marihuana en el *Zar*. Este arreglo quedaría al descubierto un mes más tarde, cuando las fuerzas de seguridad colombianas incautaron en la costa del Pacífico otro buque de Guillot-Lara, el *Karina*, mientras intentaba realizar otra entrega de armas al M-19³.

Como resultado de negociaciones con la intermediación del panameño Manuel Noriega, las relaciones del M-19 con el cártel de Medellín mejoraron después de la resolución del secuestro de Ochoa⁴. Sin embargo, continúa el debate sobre si el cártel pagó al grupo para tomar el Palacio de Justicia de

² María Jimena Duzán, *Death Beat: A Colombian journalist's life inside the Cocaine Wars*, editado y traducido por Peter Eisner (New York: Harper Collins Publishers, 1994), p. 4.

³ Rachel Ehrenfeld, *Narcoterrorism* (Basic Books, 1990), pp 31-36.

⁴ Frederick Kempe, *Divorcing the Dictator: America's bungled affair with Noriega* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1990), pp. 192-193.

Colombia en noviembre de 1985, para impedir la posible extradición de traficantes a los Estados Unidos. Aunque se carece de pruebas contundentes, el caso circunstancial parece fuerte. El ataque tuvo lugar el día en que la Suprema Corte deliberaría sobre las extradiciones. El M-19 exigió un fallo contra la extradición entre las principales demandas para liberar a sus rehenes, aunque los terroristas colombianos no eran buscados en los Estados Unidos⁵.

Sea cual fuere el origen de la toma, el M-19 y el cártel de Medellín – concretamente, su jefe Pablo Escobar- a menudo encontraron una base táctica común a mediados y fines de los años 80. Retóricamente, Escobar se distanció de la subversión de izquierda, pero el tono nacionalista del M-19 tocó una fibra sensible en él. Tras bambalinas, proporcionó a la organización recursos, dinero y refugios. Un ex miembro del M-19, que niega la participación del cártel en el episodio del Palacio de Justicia, reconoce sin embargo que el grupo recibió ayuda general de Escobar⁶. Un estadounidense que con frecuencia transportó droga para el cártel de Medellín, dijo que otro miembro del cártel, Carlos Lehder, también cooperó con el M-19. En 1988, el grupo presuntamente asesinó al Procurador General Carlos Mauro Hoyos, a cambio de efectivo de los capos de la ciudad de Medellín⁷. Sin embargo, tales acuerdos no fueron suficientes para salvar al M-19 de la derrota, y éste firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 1990.

Las FARC, los paramilitares y los traficantes

Antes del boom de la cocaína, las FARC, el grupo terrorista más antiguo y grande de Colombia, también obtuvo gran parte de su financiamiento de secuestros, extorsiones y, en cierta medida, del apoyo del Estado. Aunque las FARC no parecen haber fomentado inicialmente el cultivo y procesamiento de

⁵ Rex A. Hudson, “Colombia’s Palace of Justice tragedy revisited: A critique of the conspiracy theory”, *Terrorism and Political Violence* 7 (verano 1995): 100-103, 119-121.

⁶ Alonso Salazar J., *La parábola de Pablo: Auge y caída de un gran capo del narcotráfico* (Bogotá: Planeta, 2001), pp. 102-105, 135-143, 160-161.

⁷ Scott B. MacDonald, *Dancing on a volcano: The Latin American drug trade* (New York: Praeger, 1988), p. 35; Ehrenfeld, pp. 74–75.

coca en su territorio –principalmente en el sur de Colombia- tampoco se opuso. Aparentemente, el grupo no quería correr el riesgo de perder el apoyo de los campesinos empleados en las actividades de drogas. La FARC impuso una tasa fija, generalmente de 10%, sobre las transacciones de hoja de coca o de pasta, a cambio de proteger a los traficantes de las autoridades. Las relaciones iniciales entre las FARC y los narcos, incluido el cártel de Medellín, fueron mutuamente beneficiosas⁸.

Al igual que el M-19, las FARC usaron sus conexiones con los traficantes para obtener armas. En diciembre de 1988, las autoridades de Jamaica se apoderaron de una embarcación con 10 toneladas de armas. La carga incluía 1.000 fusiles de asalto, 250 ametralladoras, 10 morteros y 600 granadas de mortero destinadas a las FARC. El interrogatorio de los conspiradores reveló que los traficantes colombianos de cocaína que trabajaban con el grupo terrorista habían acordado la operación⁹.

Sin embargo, el final de los años 80 también trajo serios problemas entre las FARC y la industria de drogas. En primer lugar, estalló una violenta disputa relacionada con problemas de “negocios” con Gonzalo Rodríguez-Gacha, miembro del cártel de Medellín¹⁰. Rodríguez Gacha compró grandes extensiones de tierras en el norte y centro de Colombia para invertir sus narco-dólares, entrando en conflicto con las FARC al expulsar a la población campesina de sus tierras. Por otra parte, sus tierras se encontraron sujetas a los “impuestos revolucionarios” y expropiaciones de las FARC. Otros traficantes tuvieron problemas con las FARC debido a la adquisición de tierras, pero ninguno más que Rodríguez-Gacha, que al parecer se convirtió en el mayor terrateniente de

⁸ Jorge Orlando Melo, “*The drug trade, politics and the economy: the Colombian experience*”, en Elizabeth Joyce and Carlos Malamud, editores, *Latin America and the multinational drug trade* (New York: St. Martin’s Press, 1998), p. 80; Duzán, p. 104; Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína* (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987), pp. 233-234.

⁹ Ivelaw Lloyd Griffith, *Drugs and security in the Caribbean: Sovereignty under siege* (University Park, Penn.: Pennsylvania State University Press, 1997), p. 155.

¹⁰ “*Guerra a la Coca*”, *Semana* (Bogotá), 7 de febrero del 2000, pp. 39-40.

Colombia. El capo de la droga de Medellín ya tenía numerosos sicarios armados en su nómina, pero necesitaba de fuerza adicional contra las FARC. Inyectó dinero y recursos en pequeños ejércitos privados, que los ganaderos y terratenientes habían establecido anteriormente para defenderse de la invasión de las FARC. Además de proporcionar a Rodríguez Gacha una alternativa a las FARC para proteger su actividad de tráfico, estos paramilitares, como llegaron a ser llamados, se convirtieron cada vez más en una potente arma en manos de la ultraderecha política, entre ellos algunos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Fortalecidos con el dinero de la droga y adoptando una agenda violenta y anti-comunista, los paramilitares ayudaron a llevar a cabo una campaña terrorista de asesinatos contra políticos de izquierda y civiles simpatizantes de las FARC¹¹.

A medida que la década de los 80 daba paso a una nueva década, una brutal división geográfica surgió en las relaciones de las FARC con los narcos: relaciones tensas principalmente en el norte y el centro de Colombia, donde los paramilitares tenían influencia, pero lazos más fuertes en el sur, donde las FARC gozaban de una mayor fuerza en el vasto campo. Destacando esta dicotomía regional, un especialista antiterrorista colombiano señaló que Rodríguez Gacha “se alió con el ejército” contra las FARC en la estratégica región del Magdalena Medio (en el centro de Colombia), mientras que sus socios en el cártel de Medellín “simultáneamente” dieron armas a las FARC para “proteger del Ejército las pistas de aterrizaje y plantas de procesamiento de droga en las llanuras del suroeste”¹².

Sendero Luminoso forja una conexión de drogas

¹¹ Patrick L. Clawson and Rensselaer W. Lee III, *The Andean Cocaine Industry* (New York: St. Martin's Griffin, 1998), pp. 185-190; Daniel Pécaut, “*From the banality of violence to real terror: The case of Colombia*”, en Kees Koonings y Dirk Kruijt, editores, *Societies of fear: The legacy of civil war, violence and terror in Latin America* (London: Zed Books, 1999), pp. 144–145.

¹² Daniel García-Peña Jaramillo, “*Light weapons and internal conflict in Colombia*” en Jeffrey Boutwell, Michael T. Klare and Laura W. Reed, editores, *Lethal commerce: The global trade in small arms and light weapons* (Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1995), p. 100.

Mientras tanto, en el vecino Perú, otra conexión de drogas y terrorismo supuso una amenaza. Pocos años después de iniciar sus operaciones terroristas en 1980, el grupo de orientación maoísta Sendero Luminoso (SL) comenzó a operar fuertemente en los departamentos nor-centrales de San Martín y Huánuco, entre ellos el valle del Huallaga, el área de más intenso cultivo de coca en el Perú. En ese momento, el Perú era el principal productor mundial de hoja de coca. La hoja era procesada en pasta básica y trasladada por los traficantes a los laboratorios de Colombia para convertirla en cocaína, y a continuación trasladada a los Estados Unidos y otros mercados.

Algunos de los cultivadores de coca (“cocaleros”) del Huallaga eran de Ayacucho, lugar de nacimiento de SL, y el grupo, que contaba con cerca de 5.000 miembros a tiempo completo en todo el país, esperaba poder reclutarlos a sus filas. La supresión de la coca por parte del gobierno en el Huallaga, un pilar económico en la zona, reforzó la creencia de SL de que su mensaje radical podía resonar. Por otra parte, el rival de SL, el más pequeño y pro-cubano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), también operaba en el Huallaga. Los senderistas no estaban dispuestos a ceder territorios a su competidor¹³. Los motivos políticos pueden haber sido prevalecientes en la expansión de SL por el Huallaga, pero la explotación de la coca también daba ventajas económicas a un grupo que evitaba la ayuda de patrocinadores estatales.

Los traficantes de drogas del Huallaga, en general, tuvieron un enfoque pragmático hacia los dos grupos terroristas del Perú, pagando protección a cualquiera que dominase en una zona determinada. Por lo general, esto significaba trabajar con SL, que era más fuerte. Como sus miembros reconocieron en entrevistas a fines de los años 1980, SL puso tasas a la producción y el flujo de

¹³ John T. Fishel, “Coca, cocaine, sicarios, and senderistas” en Graham H. Turbiville, Jr., editor, *Global dimensions of high intensity crime and low intensity conflict* (Chicago: University of Illinois - Chicago, Office of International Criminal Justice, 1995), p. 193.

pasta básica desde las numerosas pistas de aterrizaje clandestinas del Huallaga¹⁴. Un documento capturado, “Balance Económico de Sendero Luminoso”, fechado en marzo de 1991, muestra que en una zona del Huallaga, el grupo cobraba US\$ 3.000-7.000 por cada vuelo de drogas que salía del valle. El gobierno de los EE.UU. ha estimado que alrededor de 600 vuelos de drogas similares transitaban anualmente a lo largo del puente aéreo Perú-Colombia durante este período¹⁵.

SL también cooperó con los traficantes en el sur, principalmente en el valle del río Apurímac/Ene. De acuerdo con un sacerdote que trabajó extensamente en la región, esta cooperación se refleja en las proximidades de una base terrorista clave a un centro principal de la cocaína¹⁶. A fines de los años 80, los ingresos anuales de SL relacionados con las drogas generalmente se estimaban en US\$ 15-100 millones. Dado que el arsenal del grupo siguió siendo poco sofisticado, la mayor parte del dinero derivado de la droga parece haber servido para pagar sueldos a los terroristas, más que a comprar armas modernas. Los cuadros recibían US\$ 250-500 al mes, un salario mucho más alto que, por ejemplo, el de los educadores, vocación de muchos senderistas¹⁷.

Una relación simbiótica evolucionó entre los actores ilegales en el Huallaga. A pesar de su rígido y puritano código, SL justificaba el trabajo con los traficantes como parte de sus estrechos vínculos con los cocaleros y porque las drogas debilitaban al “enemigo imperialista”, los Estados Unidos. Además de la protección que SL proveía contra la policía y los militares, a los traficantes les gustaba la disciplina que los terroristas llevaban a la fuerza de trabajo cocalera. Los cocaleros

¹⁴ Cynthia McClintock, *Revolutionary Movements in Latin America: El Salvador's FMLN and Peru's Shining Path* (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1998), p. 341.

¹⁵ Clawson y Lee, p. 180; Declaración de Robert E. Brown, Jr., Subdirector para la Reducción de Insumos, de la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP), ante la Subcomisión de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos, Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, 1º de mayo del 2001.

¹⁶ Fray Mariano Gagnon OFM, William y Marilyn Hoffer, *Warriors in Eden* (New York: William Morrow and Company, Inc., 1993), p. 160.

¹⁷ McClintock, pp. 72-73, 292, 341.

apoyaban a SL y pagaban impuestos al grupo, ya que éste negociaba –a veces respaldado por el uso de la coca- precios favorables con los traficantes¹⁸.

Rompiendo la conexión terrorismo-drogas: La experiencia del Perú

La lucha de Lima contra SL y la coca pone de manifiesto la dificultad de escindir los nexos entre terrorismo y drogas. En 1984, el gobierno colocó al Huallaga bajo estado de emergencia. Se creó un comando político-militar al mando del general Julio Carbajal, que decidió concentrarse en la lucha contra el terrorismo y hacer caso omiso del comercio de la droga¹⁹. Él razonaba que la supresión de las drogas sólo llevaría a más campesinos a las filas de SL. Por otra parte, al igual que muchos militares latinoamericanos, Carbajal consideraba a la policía, que tenía la responsabilidad de reprimir, como un rival institucional propenso a la corrupción. Usando sus amplios poderes de emergencia, Carbajal impidió a la policía llevar a cabo operaciones antidrogas. La medida le valió el apoyo de los campesinos cultivadores y los traficantes, y la reducción de su necesidad respecto de SL. Carbajal aprovechó esto para usarlos como fuentes de inteligencia contra los terroristas. Como resultado, los senderistas se hallaron en retirada del Huallaga. El vínculo entre terrorismo y drogas parecían haber sido roto.

Sin embargo, como resultado del enfoque de Carbajal también se produjo un auge de la coca. Los traficantes más poderosos, sin la fuerte presencia de SL en calidad de intermediario, comenzaron a pagar precios más bajos por la hoja de coca. Estos traficantes utilizaban la violencia contra los campesinos que se

¹⁸ Gabriela Tarazona-Sevillano, *Sendero Luminoso and the threat of narcoterrorism* (New York: Praeger, 1990), pp. 118-122.

¹⁹ Este y los siguientes párrafos sobre las políticas antidrogas y antiterroristas en el Huallaga se basan en: José E. Gonzales, “*Guerrillas and coca in the upper Huallaga valley*”, en David Scott Palmer, editor, *The Shining Path of Peru* (New York: St. Martin’s Press, 1992), pp. 106-118; Deborah Poole y Gerardo Rénique, *Peru: Time of Fear* (Londres: Latin American Bureau, 1992), pp. 178-190; y David Scott Palmer, “*The Shining Path in Peru: Insurgency and the drug problem*”, en Edwin G. Corr y Stephen Sloan, editores, *Low intensity conflict: Old threats in a new world* (Boulder, Co.: Westview Press, 1992), pp. 151-170.

resistían al régimen de precios más bajos y contra otros traficantes de drogas, para reducir la competencia. A pesar de que los cocaleros y los narcos de segundo nivel habían sufrido a veces bajo la dura “justicia revolucionaria” de SL, al menos habían ganado más dinero. Alarmado por el aumento del comercio de la coca, el gobierno del presidente Alan García levantó el estado de emergencia y renovó las operaciones antidrogas.

Estos cambios dieron a SL la oportunidad de reagruparse en el Huallaga. Como parte de su regreso, SL moderó el uso de la violencia contra la población local y negoció un nuevo *modus vivendi* con los narcos que, aparentemente, incluyó a los traficantes más importantes. Un gran traficante conocido como “El Vampiro” permitió que el grupo tuviera sus cuarteles en su casa. Senderistas y traficantes unieron sus fuerzas a principios de 1987, cuando rechazaron una ofensiva del MRTA en el Huallaga. Un ejemplo de cooperación se dio otra vez en marzo de 1989, cuando SL, con el apoyo de los traficantes y productores de coca, invadió un importante puesto de policía. El desastre obligó a renunciar al ministro del Interior.

En abril de 1989, el gobierno nombró un nuevo jefe del Huallaga, el general Alberto Arciniega, quien repitió la estrategia de Carbajal con mayor gusto, obteniendo resultados similares resultados: reveses de SL y aumento del tráfico de drogas. Después de algunos meses, sin embargo, el gobierno reemplazó a Arciniega. Las acusaciones respecto a que su actitud de “dejar hacer” hacia los traficantes incluía la aceptación de sobornos crearon presiones, incluso desde el gobierno de los EE.UU., para su derrocamiento. No obstante, más allá del caso concreto de Arciniega, no hay duda de que, en general, los militares en el Huallaga llegaron a ser extremadamente corruptos²⁰. Los reemplazantes de Arciniega fueron comandantes relativamente pasivos, y SL rápidamente recuperó su fuerza en la zona.

²⁰ John Simpson, *In the forests of the night: Encounters in Peru with terrorism, drug-running and military oppression* (New York: Random House, 1993), pp. 185-190, 238.

En 1992, “el rey Coca”, como un estudioso lo etiquetó, había dado a SL los recursos necesarios para alcanzar el punto de “equilibrio estratégico” con el Estado²¹. El grupo se embarcó en una ambiciosa campaña en Lima, pero fue un movimiento del que SL se arrepentiría. En setiembre de 1992, la policía arrestó en la capital a los líderes del grupo. A pesar del dinero de la droga, SL no pudo recuperarse de esa pérdida y de los efectos de otras medidas gubernamentales, como la creación de un programa de terroristas “arrepentidos” y el despliegue de las rondas campesinas de auto-protección. Aunque algunos líderes de rondas han cometido abusos, entre ellos beneficiarse de las drogas, un reciente estudio de RAND sugiere que las organizaciones de autodefensa supervisadas por el gobierno, similares al modelo peruano, pueden ofrecer a Colombia un solución al problema paramilitar²².

La luminosidad de Sendero se oscurece

Incluso en declive, SL mantuvo vínculos con los traficantes. Revisando los acontecimientos de 1995, DESCO, think-tank con sede en Lima, y observador desde hace mucho tiempo del terrorismo peruano, señaló que las relaciones entre SL y los traficantes se mantuvieron cercanas. Los narcos capturados, según el informe, han puesto de manifiesto su apoyo financiero y logístico a los terroristas²³. Para algunos observadores, el celo revolucionario del SL parecía estar dando paso a un comportamiento más criminal²⁴.

²¹ Bruce H. Kay, “Violent opportunities: The rise and fall of ‘King Coca’ and Shining Path”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 41 (otoño 1999): 97.

²² Para los abusos de las rondas, ver Philip Mauceri, *State under siege: Development and policy making in Peru* (Boulder, Co.: Westview Press, 1996), p. 144; la recomendación de RAND está en Angel Rebaso y Peter Chalk, *Colombian labyrinth: The synergy of drugs and insurgency and its implications for regional stability* (Santa Monica, Calif.: RAND, 2001), p. 60.

²³ Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, “Violencia y seguridad en el Perú hoy”, *Reporte Especial* 56 (Diciembre 1995), p. 3.

²⁴ Daniel Masterson, “In the Shining Path of Mariategui, Mao Tse-tung, or Presidente Gonzalo? Peru’s Sendero Luminoso in Historical Perspective”, en Daniel Castro, editor, *Revolution and Revolutionaries: Guerrilla Movements in Latin America* (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, Inc., 1999), p. 187.

La puesta en marcha por el presidente Alberto Fujimori de una gran campaña de interdicción contra los vuelos del puente aéreo que lleva la pasta básica de cocaína del Huallaga a Colombia debilitó aún más a SL. Muchos traficantes, la base impositiva esencial de SL, huyeron del Huallaga, y el precio de la hoja de coca se redujo de manera espectacular, haciendo que muchos agricultores abandonaran sus cultivos ilícitos a mediados de 1996. Como la coca se fue a la quiebra, el apoyo a los senderistas entre los coccaleros declinó²⁵.

Sin embargo, durante los últimos años, los precios de la hoja de coca han vuelto a aumentar²⁶. Esta tendencia, combinada con las dificultades políticas del Perú a raíz de la renuncia de Fujimori en noviembre del 2000, ha dado esperanzas de resurgimiento a SL. La policía informa que el grupo está fortaleciendo sus vínculos con los traficantes, incluyendo los que participan en el naciente comercio peruano de opio/heroína²⁷.

La prevención del resurgimiento del tráfico de drogas y de SL son dos desafíos estrechamente relacionados que enfrenta el gobierno del Perú. A pesar de los golpes dados por Fujimori contra el tráfico y el terrorismo, su falta de atención al desarrollo de las instituciones de la democracia peruana ha obstaculizado la capacidad de la nueva administración del presidente Alejandro Toledo para combatir la subversión y la delincuencia.

El nexos de Colombia se expande

Los cambios en la dinámica del tráfico de drogas de Colombia en la década de los 90 ayudaron a establecer el escenario para que las FARC y los paramilitares de extrema derecha ganaran una mayor cantidad de dinero de esa fuente. El momento fue especialmente fortuito para las FARC. El colapso de la

²⁵ ONDCP, Declaración Brown; Kay, 119–122.

²⁶ Departamento de Estado U.S., Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley (INL), *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* (Washington, D.C.: INL, Marzo 2000), sección IV, p. 39; *ibid.*, (Marzo 2002), section IV, p. 39.

²⁷ “Peru fears reemergence of violent rebels”, *Washington Post*, 10 de diciembre del 2001, p. A18.

Unión Soviética y la intensificación de los problemas económicos de Cuba restringieron cualquier tipo de ayuda que pudiera haber venido de esos gobiernos.

Una ofensiva del gobierno colombiano contra el cártel de Medellín, que controlaba el 80% del negocio de la cocaína, cobró la vida de Rodríguez-Gacha y Escobar, y afectó gravemente su imperio. El rival cártel de Cali rápidamente llenó el lugar de Medellín en el mercado. Sin embargo, la preeminencia de Cali fue de corta duración. Bajo una intensa presión de Washington debido a revelaciones de que, como candidato, había aceptado dinero del cártel de Cali en 1994, el presidente Ernesto Samper tomó medidas enérgicas contra los capos de la droga de Cali y, aunque reticentemente, encarceló a muchos de ellos.

Aunque la caída de estos dos narco-imperios tuvo poco impacto en el flujo general de cocaína a los Estados Unidos, llevó a un sistema de tráfico más difuso, compuesto por numerosas redes pequeñas. A menudo carecientes de recursos propios y extensos, estas redes de tráfico recientes se han basado en gran medida en la protección de las FARC y los paramilitares. Con la proliferación de las redes de tráfico, un pequeño grupo terrorista colombiano de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se especializaba en extorsionar a las compañías petroleras, completó sus ingresos imponiendo tasas al negocio de la droga.

Cuando Colombia saltó del tercer al primer lugar entre los productores andinos de coca, las FARC, en particular, ganaron un mayor acceso al dinero de la droga. Como resultado de las acciones de los vecinos de Colombia –la represión del Perú al puente aéreo y la postura más dura de Bolivia contra la producción de coca-, el cultivo de coca en Colombia aumentó a más del doble entre 1995 y 2000²⁸. La mayor parte de este aumento se produjo en los departamentos sureños de Guaviare, Caquetá y Putumayo, bastiones de las FARC, donde los campesinos cultivadores de coca han proporcionado al grupo

²⁸ Declaración del Administrador de la DEA, Donnie R. Marshall, ante el Subcomité de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos, Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, 2 de marzo del 2001.

sus más fuertes bases rurales de apoyo²⁹. Para no ser menos, en los últimos años los paramilitares se han expandido hacia el sur, en parte para arrebatarse el control del cultivo de coca a las FARC³⁰.

Además, en la década de 1990 Colombia pasó a producir heroína, con opio cultivado principalmente en los departamentos sudoccidentales de Tolima, Huila y Cauca. La heroína de Colombia capturó rápidamente un porcentaje importante del mercado de la costa este de los EE.UU. A mediados de la década, una estrecha correlación existía entre los cultivos de amapola cultivo y las zonas controladas por las FARC o los paramilitares, principalmente estos últimos³¹.

El dinero de la droga, combustible del terrorismo en Colombia

En 1998, el gobierno colombiano estimaba que el dinero del narcotráfico era la mayor fuente de ingresos para los grupos terroristas del país, tanto de izquierda como de derecha. Ese año, según informes, recibieron un total de US\$ 551 millones de sus nexos con las drogas, US\$ 311 millones de la extorsión, y US\$ 236 millones de secuestros³². En el caso de los ingresos de las FARC de ese mismo año, el gobierno estimaba que el 48% provino de nexos con las drogas, 36% de la extorsión, 8% de secuestros, 6% del robo de ganado, y el resto de robos a bancos y otras actividades ilícitas³³. El tamaño del botín de guerra del grupo explica por qué ha sido capaz de pagar a sus nuevos reclutas tres veces

²⁹ Frank Safford and Marco Palacios, *Colombia: Fragmented land, divided society* (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 357, 362-363.

³⁰ "Colombia's Anti-Drug plan fuels fight in Coca country", *Washington Post*, 14 de octubre del 2000, pp. A14-15.

³¹ Pécaut, *Guerra contra la sociedad* (Bogotá: Espasa, 2001), p. 101; Camilo Echandía, "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: Geografía, economía y violencia" en María Victoria Llorente y Malcolm Deas, editores, *Reconocer la guerra para construir la paz* (Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1999), p. 137.

³² Rebaso y Chalk, p. 32.

³³ Alfredo Rangel Suárez, "Parasites and predators: Guerrillas and the insurrection economy of Colombia", *Journal of International Affairs* 53 (primavera 2000): 585.

más de lo que el Ejército colombiano paga a sus nuevos soldados³⁴. Las FARC tenían un estimado de 7.000 miembros activos en 1995, organizados en 60 frentes; en el año 2000, había más de 15.000-20.000, en 70 frentes. Aunque no posee grandes ciudades, el grupo opera en toda Colombia, y se piensa que controla alrededor de un tercio del territorio nacional³⁵.

Cuando las AUC se fundaron, hace varios años, su fuerza era alrededor de 4.500; en 2001, esa cifra se situaba en unos 8.000, según el ministerio de Defensa de Colombia³⁶. Alguna vez pistoleros a sueldo de los narcos y los ricos de ultraderecha ricos, los paramilitares se han convertido en una fuerza política-militar por derecho propio. El Informe de Derechos Humanos en Colombia, del Departamento de Estado U.S. en 2001, señaló que, a pesar de las medidas del Gobierno contra el aumento de los paramilitares, algunos miembros de las fuerzas de seguridad siguieron colaborando con ellos. En setiembre de 2001, las AUC se unieron a las FARC y el ELN en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del gobierno de los EE.UU.

Hasta la fecha, la mayor parte del dinero de la droga para los terroristas en Colombia provenía de tasas y protección al negocio de la droga. Las FARC, en particular, han estandarizado sus honorarios. En 1999, por ejemplo, cobraban US\$ 15,70 por cada kilo de pasta básica de cocaína y US\$ 52,60 por cada kilo de cocaína que los traficantes producían en su territorio. También cobraban US\$ 10,50 por cada kilo de cocaína y US\$ 45,00 por cada kilo de goma de opio enviados a través de las áreas bajo su control. Por proteger un vuelo doméstico de drogas en una de sus pistas de aterrizaje, el grupo cobraba US\$ 2.631, mientras que un vuelo internacional tenía un costo de US\$ 5.263. Las FARC también exigían a los traficantes pagar el 20% del valor del envío para el transporte de

³⁴ Leader y Wiencek, p. 50.

³⁵ Rebaso y Chalk, pp. 26-27; Mark Falcoff, "Colombia: The problem that will not go away," *AEI Latin American Outlook* (Marzo 2000): 1, <http://www.aei.org/lao/lao11476.htm> (consultado el 17 de junio del 2002).

³⁶ "A survey of Colombia: Drugs, war and democracy", *Economist*, 21 de abril del 2001, p. 12.

insumos químicos a lo largo de un río a través de territorio terrorista. De acuerdo con los militares colombianos, poco más del 50% de los frentes de las FARC a comienzos de 2000 han participado en esta recaudación de fondos institucionalizada, en comparación con alrededor del 17% de los frentes del ELN. Poco más del 40% de los frentes de las AUC estaban vinculados a la actividad de tasas y protección, aunque su fundador Carlos Castaño sugirió públicamente en marzo del 2000 que el 70% de los ingresos de las AUC provenían de esta fuente³⁷.

Participación de las FARC y las AUC en el tráfico

Las FARC reconocen cobrar tasas sobre el tráfico de drogas, pero han negado sistemáticamente su participación en el tráfico. A pesar de que las AUC también han admitido recaudar tasas a las drogas, se han acercado a reconocer oficialmente su participación en el tráfico. Sin embargo, los líderes de las AUC afirman que el tráfico representa un comportamiento no autorizado de comandantes deshonestos que han sido amonestados, y que hay reformas en camino³⁸. Estos repudios y advertencias suenan huecas frente a las crecientes evidencias de múltiples fuentes sobre que numerosas unidades de las FARC y las AUC han cruzado claramente en muchas ocasiones, durante los últimos años, la línea del tráfico de drogas.

En mayo de 1999, la Policía Nacional de Colombia capturó un gran laboratorio de drogas de las AUC, con una tonelada de cocaína, en la zona del

³⁷ Rebase and Chalk, pp. 32–33; “To Turn the Heroin Tide,” *Washington Post*, February 22, 1999, p. A9; “Colombian Paramilitary Chief Shows Face,” *Associated Press*, March 2, 2000.

³⁸ Para las negativas de las FARC, ver “*For rebels, it’s not a drug war*”, *Washington Post*, 10 de abril del 2000, pp. A1, A16; “*Entrevista a Raúl Reyes*”, *Prensa Latina* (La Habana), 20 de julio del 2001; y varios documentos publicados en el sitio web del grupo hasta mayo del 2002, como “*Legalizar el consumo de la droga*”, <http://www.farc-ep.org/Documentos/legalizar.html> Para las declaraciones de las AUC, ver “*Colombia’s other Army*”, *Washington Post*, 12 de marzo del 2001, pp. A1, A12; Mauricio Aranguren Molina, *Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos* (Bogotá: Oveja Negra, 2001), pp. 206–207.

Magdalena Medio. El jefe de la Policía Nacional, Rosso José Serrano, lo llamó uno de los más duros golpes contra el tráfico paramilitar de drogas³⁹.

También en mayo de 1999, una redada de drogas que cobró la vida del director financiero de las FARC, Josué Prieto, reveló un plan para usar US\$ 3 millones de la venta de cocaína para comprar rifles de asalto⁴⁰.

En febrero de 2000, y nuevamente en marzo de 2001, altos funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) declararon ante el Congreso de los EE.UU. que las AUC parecían estar involucradas en el procesamiento de cocaína y que por lo menos una unidad paramilitar enviaba cocaína a los EE.UU.⁴¹.

Campesinos del departamento de Caquetá dijeron a los periodistas en abril de 2000 que las FARC les ordenaron cultivar coca y que se vieron obligados a vender su producción a un monopolio controlado por las FARC. Las AUC también obligaban a los campesinos de su zona a tratar con un monopolio paramilitar similar⁴².

También en abril de 2000, el Observatorio Geopolítico de Drogas, organización francesa independiente de expertos que estudian el comercio mundial de drogas, informó que las FARC en el sur de Colombia ya no se contentaban solamente con cobrar tasas a la producción de coca. El grupo estaba asumiendo el rol de los traficantes intermediarios (“chichipatos”) que compran la pasta básica de cocaína de los productores para abastecer los laboratorios de procesamiento de cocaína. El Observatorio Geopolítico de Drogas citó esto como evidencia de que “las FARC parecen haber llegado a un punto de no retorno en el camino de criminalizar su organización”⁴³.

³⁹ “‘Paras’ siguen huella de ‘El Mexicano’”, *El Tiempo* (Bogotá), 6 de mayo de 1999.

⁴⁰ “*Colombia in the long shadow of war*”, *Economist*, 17 de julio de 1999, p. 31.

⁴¹ Rebas y Chalk, p. 59; DEA, Declaración de Marshall.

⁴² “*Cocaine War: A Special Report*”, *New York Times*, 21 de abril del 2000, p. A12.

⁴³ “*The World Geopolitics of Drugs, 1998/1999: Annual Report*”, (Abril 2000), p. 143, <http://www.ogd.org>

En octubre de 2000, un periodista estadounidense relató su entrevista con un médico ecuatoriano que vivía cerca de la frontera con Colombia, que implicó a las FARC y las AUC en el refinamiento de drogas. El médico dijo que los miembros de ambos grupos que operaban en las zonas de cultivo de coca llegaban a su clínica para ser tratado por hinchazones en las manos, resultado de trabajar con productos químicos utilizados en el procesamiento de drogas⁴⁴.

En noviembre de 2000, las autoridades mexicanas anunciaron los resultados de una importante investigación, que puso de relieve la detención del Dr. Carlos Charry, ciudadano colombiano. Charry había servido como enlace entre Jorge Briceño, miembro de la secretaría de las FARC y el cártel de Tijuana, México. Charry tenía la intención de llegar a un acuerdo mediante el cual las FARC entregarían cocaína a cambio de dinero en efectivo y armas de los traficantes mexicanos. El médico tenía una clínica en la zona desmilitarizada que el presidente Andrés Pastrana estableció para las FARC en 1998, como parte del proceso de paz de Colombia. Charry tenía una cinta de vídeo de sí mismo con Briceño para establecer su buena fe. Los investigadores colombianos también vincularon a los hermanos de Charry con las FARC, la compra de armas, y los traficantes mexicanos. La detención de Charry pudo haber frustrado el acuerdo con los capos de la droga de Tijuana, pero demostró el potencial del tráfico de las FARC fuera de Colombia⁴⁵.

También a fines del 2000, la revista colombiana de noticias *Semana* publicó una investigación sobre las actividades de drogas del Frente 16º de las FARC, que opera principalmente en el departamento de Guainía, en la frontera oriental del país. La investigación, basada en informes de la inteligencia colombiana, testimonios de residentes locales y una fuente cercana a los terroristas, encontró que el frente, bajo el comandante Tomás Molina (“Negro Acacio”), se había convertido en la columna vertebral financiera de las FARC. Había obtenido cerca

⁴⁴ “Colombia’s Creeping War,” *Washington Post*, October 1, 2000, p. A22.

⁴⁵ “La Rajada de ‘Jojoy’”, *Cambio* (Bogotá), November 27–December 4, 2000; “Entre Los Palos”, *Cambio* (Bogotá), December 4–11, 2000, <http://www.revistacambio.com>.

de US\$ 15 millones entre 1996 y 1998, principalmente del tráfico de drogas. El Frente 16º supervisaba una serie de actividades de drogas. Por ejemplo, los agricultores estaban obligados a informar el número de hectáreas sembradas y las fechas de cosecha. La pasta básica era llevada a los puntos de recolección, donde las FARC probaban la calidad de la droga y registraban las cantidades entregadas. Las FARC controlaban toneladas de cocaína, y una parte de ellas era vendida al traficante brasileño Luis Fernando Da Costa (también conocido como Fernandinho Beira-Mar), que suministró armas al Frente 16º⁴⁶.

En noviembre de 2000, después de una investigación de 18 meses, la Comisión Investigadora Parlamentaria del Tráfico de Drogas de Brasil emitió un informe que, en parte, describió el negocio de cocaína de las FARC con narcos brasileños. Estos traficantes de drogas a su vez abastecían al grupo con armas compradas al hombre fuerte de Surinam, Desi Bouterse⁴⁷.

A principios de 2001, el ejército colombiano lanzó la “Operación Gato Negro” contra el Frente 16º de las FARC. Aunque el “Negro Acacio” escapó, Beira-Mar fue detenido después del ataque y extraditado al Brasil. Los documentos capturados y otros testimonios confirmaron las investigaciones de *Semana* y del Brasil. Tras una larga investigación, en marzo de 2002, el Departamento de Justicia U.S. anunció el proceso a tres miembros de las FARC, principalmente al “Negro Acacio”, por la venta de cocaína a traficantes internacionales, a cambio de dinero en efectivo, armas y otros equipos. La acusación formal indica que, además del procesamiento de cocaína y su venta a los traficantes de drogas, el Frente 16º recolectaba cocaína de varios frentes, entre ellos el 1º, 7º, 39º, 10º, y 44º⁴⁸.

⁴⁶ “*Se busca*”, *Semana*, 4 de setiembre del, 2000, pp. 40-42.

⁴⁷ “*El 8.000 brasileño*”, *Cambio*, 18-25 diciembre del 2000.

⁴⁸ “*La prueba reina*”, *Semana*, 2 de abril del 2001, pp. 26-29; “*Rebels linked to drug trade by arrests in Colombia*”, *New York Times*, 4 de marzo del 2001, p. A4; Transcripción de la conferencia de prensa del Fiscal General U.S., 18 de marzo del 2002, <http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2002/031802newsconferencefarc.htm> (consultado el 17 de junio del 2002).

Los documentos también muestran contactos entre Beira-Mar, el “Negro Acacio”, y el traficante peruano traficante Luis Aybar. En 1999 Aybar entregó hasta 10.000 fusiles de asalto al Frente 16º. Las denuncias de corrupción relacionadas a los envíos ayudaron a provocar la renuncia del jefe de facto de la inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos, y la caída del presidente Fujimori. En relación con el abastecimiento de armas a las FARC, Beira-Mar también trabajó con un grupo de lavadores de dinero de Oriente Medio en Brasil y Paraguay que, a su vez, posiblemente tenían vínculos con extremistas árabes en dichos países⁴⁹.

En julio y agosto de 2001, en el departamento rico en coca del Putumayo, el Ejército colombiano destruyó una refinería operada por las FARC, capaz de producir 2.000 galones de gasolina al día, exclusivamente para procesar droga⁵⁰.

Para participar en el tráfico de drogas, las FARC abusaron de la zona desmilitarizada que el presidente Pastrana les otorgó a principios de 2002. A finales de agosto de 2000, fotos de AP tomadas en la zona, publicadas por *El Espectador* en Bogotá, mostraron a miembros de las FARC en uno de los sitios del grupo para recopilación y procesamiento de la hoja de coca. De acuerdo con Eduardo Soto-Trillo, abogado español de derechos humanos que viajó a la zona a principios del 2001, las imágenes molestaron a las FARC, que prohibieron a los periodistas ingresar a la zona en la que fueron tomadas. Soto-Trillo también tomó testimonios de primera mano de los habitantes de la zona desmilitarizada, que fue testigo de la compra y venta de la producción de coca por las FARC. Desde el cierre de la zona, el ejército colombiano ha informado tener pruebas, incluso mensajes interceptados, sobre los esfuerzos de las FARC para mover grandes

⁴⁹ “La conexión Brasil”, *El Tiempo*, 12 de marzo del 2001; “Tentáculos del Medio Oriente”, *El Espectador* (Bogotá), 4 de noviembre del 2001.

⁵⁰ INCSR, (Marzo 2002), sección IV, p. 22.

cantidades de cocaína almacenada en la antigua zona hacia el oeste, hasta los puertos de la costa del Pacífico⁵¹.

El reto de Colombia

¿Cuál es la perspectiva de la conexión terrorismo-drogas en Colombia? No se puede descartar que consideraciones políticas relacionadas con su imagen aún puedan inducir a las FARC o las AUC de tomar medidas para restringir la participación en el negocio de la droga. Las AUC se comprometieron el año pasado a dejar de depender del dinero de la droga. Sin embargo, el ritmo alto de la violencia en Colombia y el reciente abandono del proceso de paz del país sugieren que los dos grupos continuarán con las narco-ganancias para ayudar a armarse. Por otra parte, incluso si los líderes de las FARC y las AUC sinceramente trataran de distanciarse a sí mismos de forma voluntaria del comercio de las drogas, no está claro cómo podrían hacerlo, más allá de medidas cosméticas. Dada la –por decir lo menos- aquiescencia ante las conexiones de sus organizaciones y el narcotráfico, estos líderes podrían ser incapaces de controlar a los comandantes de los frentes regionales, acostumbrados a cosechar grandes ganancias.

Aunque cualquier reducción del vínculo de las FARC y las AUC con las drogas sería más probable a través de la coerción gubernamental, el logro de cualquier recorte importante a través de la fuerza presenta un reto formidable y a largo plazo. La oposición violenta a la erradicación de la droga está en ascenso, con un estimado de 86 incidentes separados en el 2001 en el que aviones y helicópteros antidrogas fueron alcanzados por fuego desde tierra⁵². Algunos cultivos de droga destruidos por la erradicación se están desplazando a otras zonas de Colombia, también a menudo bajo influencia de las FARC o las AUC⁵³. A

⁵¹ *El Espectador*, 30 de agosto del 2000; Eduardo Soto-Trillo, *Voces sin voz: Revelaciones de un viaje a la zona de despeje* (Bogotá: Intermedio, 2001), pp. 70, 90, 226, 258; “Urgencia de las FARC para negociar cocaína”, *El Tiempo*, 24 de abril del 2002.

⁵² INL, División de Apoyo Aéreo y Embajada de los EE.UU. en Bogotá.

⁵³ “Wider war in Colombia”, *Washington Post*, 6 de setiembre del 2001, pp. A1, A18.

inicios del 2002, el monto de los progresos realizados en la destrucción de la coca durante el primer año de la intensificación de la erradicación de la intensificación en el llamado “Plan Colombia” no es claro. Aunque las cifras de Colombia sugieren un 11% de reducción, el gobierno de los EE.UU. estima que los cultivos podrían haber aumentado en casi el 25%⁵⁴. Se está tratando de conciliar las diferencias.

Si el roto proceso de paz de Colombia se puede restaurar, depende de algo más que la reducción de los ingresos de drogas de las FARC y las AUC. Las raíces del conflicto son profundas, y las cuestiones en juego son multidimensionales. Como muestran las cifras de Colombia, las drogas son la mayor fuente de financiamiento del terrorismo en el país, pero no la única. Sin embargo, sin algún freno en el narco-flujo de fondos destinados a las arcas del terrorismo, la búsqueda de paz en Colombia, de por sí difícil, promete ser más, no menos, complicada.

⁵⁴ “Colombia says it cut coca crop”, *New York Times*, 1º de marzo del 2002, p. A3; “Colombia’s coca up, U.S. says”, *New York Times*, 9 de marzo del 2002, p. A5.